

## ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO

### SUGERENCIAS METODOLÓGICAS RESPECTO DEL CAPÍTULO V

Piensa el autor que la materia contenida en este Capítulo, especialmente aquella que dice relación con la época en que se dictó el Código Civil, y aquella que se refiere a las características originarias de dicho Código, se prestan para organizar trabajos individuales o colectivos de investigación bibliográfica, o exposiciones de un grupo de alumnos al resto del curso, incluso con utilización de material audiovisual.

#### I. ESTRUCTURA DEL CÓDIGO CIVIL

##### 17. Explicación

El plan del Código Civil chileno guarda analogía con el Código de Napoleón. Pero a diferencia de este último, que se divide en un título preliminar y tres libros,<sup>1</sup> el Código Civil chileno se divide en un título preliminar y cuatro libros. El contenido, en uno y otro Código, del título preliminar y de los dos primeros libros, es más o menos idéntico en cuanto a las materias de que se ocupan. Pero en el libro tercero difieren. El del Código francés, titulado “De los diferentes modos de adquirir la propiedad”, trata, en realidad, de siete grandes materias: las sucesiones, las donaciones y los testamentos, la teoría general de las obligaciones, las reglas especiales de

<sup>1</sup> A principios del siglo XXI, se incorporó un Libro IV a los tres primeros Libros del Código Civil francés. La referencia que se hace aquí ha de entenderse formulada al Código originario.

los contratos en particular, los regímenes matrimoniales, los privilegios e hipotecas y la prescripción. El Código Civil chileno, en cambio, divide estas materias entre sus libros tercero y cuarto, dedicando el libro tercero a la sucesión por causa de muerte y a las donaciones entre vivos; y el libro cuarto, a las obligaciones y contratos. De esta manera pensó don Andrés Bello superar las críticas que ya en esa época se habían formulado al libro tercero del Código Civil francés, por el cúmulo de materias heterogéneas que contenía.

Vodanovic, en su libro *Curso de Derecho Civil*, sostuvo que el Código Civil chileno, en su estructura, siguió la estructura de los cuerpos legales romanos, dividiéndose entonces en libros y títulos. Cada título se refiere a una materia especial, la cual divide en párrafos y esos párrafos los divide en artículos.

De esta forma, nuestro Código comprende un título preliminar y cuatro libros, sumando un total de 2.525 artículos.<sup>2</sup>

.....

El modelo más importante para la redacción del Código Civil chileno fue sin duda el Código Civil francés. Bello se inspiró en dicho Código especialmente en materia de obligaciones y contratos. Se ha dicho que los artículos que reglan las obligaciones en el Código Civil chileno son una virtual adaptación de Pothier.

Sin embargo, el Código Civil chileno no es una copia de su antecesor francés, ni siquiera en las materias recién referidas.

<sup>2</sup> VODANOVIC, ANTONIO, *Curso de Derecho Civil*, Editorial Nascimento, 1945, Tomo I, 2ª edición, págs. 68 y 69.

Debe tomarse en consideración que habían transcurrido ya más de cincuenta años desde la vigencia del Código de Napoleón, y los intérpretes y exégetas de dicho cuerpo legal habían abundado. Las críticas formuladas en Francia y en el extranjero al Código Civil francés fueron ciertamente conocidas por don Andrés Bello, el que las tomó en especial consideración para mejorar aquellas disposiciones que le parecieron confusas o de difícil interpretación. Es así como el profesor de Derecho Romano de la Universidad Católica de Valparaíso, don Alejandro Guzmán, ha llegado a sostener que el movimiento codificador recibió en el Código Civil chileno “una concreción en la obra legislativa mejor lograda del siglo diecinueve, superior a todas las de su época, incluyendo al gran Código Civil francés”.<sup>3</sup>

En cambio el Código Civil chileno no es seguidor del Código de Napoleón en materia sucesoria ni en lo que se refiere a la constitución de la familia. En estos tópicos es evidente la influencia que tuvo sobre nuestro Código el ordenamiento jurídico español. Y en materia de régimen de propiedad, la creación del sistema de la inscripción, tomado de las viejas leyes alemanas, significó un adelanto que tardó mucho en hacerse efectivo en Francia.

18. ANTONIO VODANOVIC: *Curso de Derecho Civil*, Editorial Nascimento, 1945, Tomo I, 2ª ed., págs. 68 y 69.

*Analogía del plan del Código Civil chileno con el del Código francés.* El plan del Código Civil chileno, que es el llamado romano-francés, guarda analogía con el del Código de Napoleón. Pero a diferencia de este último, que se divide en un título preliminar y tres libros, el nuestro se divide en un título preliminar y cuatro libros. El contenido, en uno y otro Código, del título preliminar y de los dos primeros libros, es más o menos igual en cuanto a las materias de que se ocupan. Pero en el libro tercero

difieren. El del Código francés, titulado “De los modos de adquirir la propiedad”, trata, en realidad, siete grandes materias: las sucesiones, las donaciones y los testamentos, la teoría general de las obligaciones, las reglas especiales de los contratos en particular, los regímenes matrimoniales, los privilegios e hipotecas y la prescripción. El Código chileno dedica su libro tercero a la sucesión por causa de muerte y a las donaciones entre vivos, y el libro cuarto, a las obligaciones y contratos.

El plan de nuestro Código es más científico que el del Código francés, cuyo libro tercero ha merecido muchas críticas por el cúmulo de materias heterogéneas que contiene.

*Estructura del Código Civil chileno.* Siguiendo una antigua costumbre, que se remonta a los cuerpos legales romanos, los códigos modernos se dividen en libros y éstos en títulos. Cada título se ocupa de una materia especial. El matrimonio, la tradición, asignaciones testamentarias, la compraventa, etc.

El Código Civil chileno comprende un título preliminar y cuatro libros, seguidos del “Título final”. Cada libro se divide en títulos y muchos de éstos en párrafos. Por último, el Código se distribuye en artículos, desde el 1º al 2524, más el artículo final.

El “Título preliminar” comprende seis párrafos y consta de 53 artículos. Trata de todo lo relativo a la ley y de la definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes. “Consigna nociones y definiciones que se refieren igualmente a todas las ramas del Derecho. Se las ha colocado en este Código por ser el más general y porque fue el primero que se dictó entre nosotros”.

El Libro I, que está dividido en 33 títulos, que comprenden los artículos 54 a 564, se titula “De las personas”. Trata de las personas naturales en cuanto a su nacionalidad y domicilio; del principio y fin de su existencia; del matrimonio; de las diferentes categorías de hijos (legítimos, naturales e ilegítimos); de las pruebas del estado civil; de la emancipación; de la habilitación de edad; de las tutelas y curatelas; de las personas jurídicas, etc.

<sup>3</sup> GUZMÁN B., ALEJANDRO, “La codificación del Derecho”, en *Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso*, tomo III, 1984, pág. 11.

El Libro II se titula “De los bienes, y de su dominio, posesión, uso y goce”. Se divide en 14 títulos que comprenden los artículos 565 a 950. Océpase de las varias clases de bienes: del dominio; de la ocupación; de la accesión; de la tradición; de la posesión; del usufructo; de las servidumbres; de los derechos de uso y habitación; de la reivindicación; de las acciones posesorias, etc.

El Libro III se denomina “De la sucesión por causa de muerte, y de las donaciones entre vivos”. Se divide en 13 títulos que comprenden los artículos 951 a 1436. Trata de la sucesión intestada; de los testamentos; de las asignaciones testamentarias; de las asignaciones forzosas; de la revocación y reforma del testamento; de la apertura de la sucesión y de su aceptación, repudiación e inventario; de los ejecutores testamentarios; de los albaceas fiduciarios; de la partición de los bienes; del pago de las deudas hereditarias y testamentarias; del beneficio de separación, y de las donaciones entre vivos.

El Libro IV, titulado “De las obligaciones en general y de los contratos”, se divide en 42 títulos que comprenden los artículos 1437 a 2524. Trata de las diferentes clases de obligaciones; del efecto de ellas; de los modos de extinguirlas (pago efectivo, novación, remisión, etc.); de su prueba; de las capitulaciones matrimoniales y de la sociedad conyugal que forma parte del régimen de la familia; de las diversas clases de contratos (compraventa, arrendamiento, sociedad, etc.); de los cuasicontratos; de los delitos y cuasidelitos civiles; de la fianza; de la prenda; de la anticresis; de la transacción; de la prelación de créditos, y de la prescripción.

El Título final consta sólo del artículo final.

En resumen, el Código Civil se compone de ciento cuatro títulos, comprendiendo el preliminar y el final, y de 2.525 artículos, con el final.

## EJERCICIOS

1. *Revise en su Código Civil la estructura descrita por el señor Vodanovic.*

2. *Encuentre en su Código Civil las normas que reglan las siguientes materias:*

- a) *Contrato de compraventa.*
- b) *Derechos y obligaciones entre los cónyuges.*
- c) *Derecho de propiedad.*
- d) *La remisión (perdón de una obligación).*
- e) *Formas en que se pueden extender los testamentos.*
- f) *La separación de bienes entre los cónyuges.*
- g) *Las personas jurídicas.*
- h) *Contrato de mandato.*
- i) *Derechos y obligaciones entre los padres y los hijos.*
- j) *La tradición (modo de adquirir el dominio).*
- k) *La partición de bienes.*

## II. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL CÓDIGO CIVIL CHILENO

### 19. Explicación

El profesor Pedro Lira Urquieta, durante la Velada Solemne celebrada en la Universidad de Chile, con ocasión de la celebración del centenario de nuestro Código Civil, señaló cinco principios jurídicos que, a su juicio, informaron la obra codificadora, a saber: la omnipotencia de la ley; la igualdad de todas las personas ante la ley; la constitución cristiana de la familia y su protección; el respeto y la ayuda a la propiedad individual, y la libertad de contratar. Estos principios corresponden, como es obvio, a aquellos principios orientadores de toda la legislación civil, y pueden encontrarse, en mayor o menor medida, en todos los Códigos Civiles decimonónicos.

Nos parece interesante resaltar estos principios mencionados por el profesor Lira. Sin embargo, consideramos que su exposición sería insuficiente al dejar de mencionar dos características que marcaron también la gran obra de Bello: el individualismo jurídico y la consagración de principios morales.

20. PEDRO LIRA URQUIETA: “El Código Civil y su época”, trabajo leído en la Velada Solemne celebrada en la Universidad de Chile el 14 de diciembre de 1955, con ocasión del Centenario del Código Civil. Recopilada en *El Código Civil chileno y su época*, Editorial Jurídica de Chile, 1956, págs. 57 y 58.

A nuestro parecer, los principios jurídicos que informaron la obra codificadora fueron éstos: la omnipotencia de la ley; la igualdad de todas las personas ante la ley; la constitución cristiana de la familia y su protección; el respeto y la ayuda a la propiedad individual, y la libertad de contratar como norma de creación jurídica obligatoria.

La extensión que iba a darse a estos principios marcó el grado de prudencia de los redactores del Código Civil. Es indudable que no llegaron jamás a extremos que hubieran desencadenado reacciones ni quisieron implantar las reformas de una manera brusca atropellando conveniencias. Tampoco crearon un sistema legal que se pusiera de inmediato en pugna con todo el derecho vigente y que hubiera obligado a alteraciones políticas o económicas. Por el contrario, juzgamos que la tarea codificadora de Bello constituyó una prolongación de la obra política de 1833. La misma filosofía es la que da vigor a la Carta Fundamental de ese año, a leyes patrias que la siguen y al Código Civil. No en balde fueron, en general, unos mismos los hombres que idearon esos textos y que supieron aplicarlos. Esta unidad y esta continuidad es lo que dio un carácter perenne a la construcción jurídica de entonces.

### *1ª CARACTERÍSTICA: EXALTACIÓN DEL PRINCIPIO DE JURIDICIDAD O ESTADO DE DERECHO*

#### 21. Explicación

Este principio, que algunos autores han denominado también “culto a la ley” u “omnipotencia de la ley”, se manifiesta ya en el artículo 1º del Código Civil, donde se resalta la característica de voluntad

soberana que reviste la ley. La costumbre, otrora fuente tan fecunda del Derecho, queda privada de su fuerza obligatoria por disposición del artículo 2º. Y los jueces no pueden compartir el imperio reservado a la ley: el artículo 3º reserva la fuerza obligatoria de las sentencias judiciales tan sólo a las causas en que actualmente se pronunciaran.

No se detiene aquí la subordinación de la magistratura a los dictados legislativos, puesto que el Código establece en los artículos 19 a 24 un sistema reglado de interpretación de la ley, obligatorio para los jueces. Al haber desaparecido la monarquía, es ese ente abstracto llamado ley el que reemplazó al rey y ocupó la cúspide del poder jurídico que había estado reservado a éste.

Es evidente también que la labor de actualización del Derecho a las nuevas circunstancias económicas y sociales del país quedó radicada fundamentalmente, según el criterio de Bello, en el legislador, sin perjuicio de aceptar en ciertos casos la actualización por vía jurisprudencial. Por eso es que ordena a las Cortes Superiores de Justicia, en el artículo 5º del Código, dar cuenta anualmente al Presidente de la República de las dudas, dificultades y vacíos que hayan encontrado en la inteligencia y aplicación de las leyes. Y es por esto también que reserva al legislador, en el artículo 3º, la explicación e interpretación de la ley de un modo generalmente obligatorio.

Parece que Bello sigue a Portalis en este verdadero “fetichismo de la ley”, como algunos han llamado a la omnipotencia legal. En efecto, el jurista francés opinaba que “el Derecho es la razón universal, la suprema razón fundada en la naturaleza misma de las cosas. Las leyes son o no deben ser sino el Derecho reducido a reglas positivas, a preceptos singulares... la ley permite o prohíbe; ordena, establece, corrige, pune o recompensa”.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> PORTALIS, JEAN-ETIENNE-MARIE, *Discurso preliminar del proyecto de Código Civil francés*, Imprenta Edeval, Valparaíso, 1978, págs. 46 y 50.



22. PEDRO LIRA URQUIETA: *El Código Civil y su época*, op. cit., págs. 25 a 27 y 58 a 61.

El Código Civil, empapado del clasicismo jurídico, no vino a sustituir a una legislación revolucionaria. Casi por el contrario, pasó a ser él mismo revolucionario en la medida que acogía instituciones y novedades que desconocía la vieja ley colonial. Su carácter clásico no pierde una tilde con esto. Es fruto maduro que llega a la vida jurídica a su debido tiempo, cuando retardarlo hubiera sido mengua.

De los elementos característicos del clasicismo jurídico que hemos señalado, todos ellos, cuál más cuál menos, se encuentran en el Código Civil chileno. Podemos decirlo con palabras ya consagradas. Hay en él una pasión tal por el orden y por el equilibrio, por lo que es razonable e imperecedero, que aparece como una obra absolutamente impersonal en la cual no se transparenta el más leve movimiento de pasión o de voluntad individual. Desde su artículo primero, que tiene la sobria majestad de los preceptos de las *Institutas*, hasta el último sopla a través del Código un aire de respeto a la ley, a la norma escrita, a la voluntad humana libremente ejercitada, que es la más pura esencia clásica. Reina en él una pasión por el orden que se manifiesta en la distribución de las materias, en su preocupación por dar definiciones y en poner de manifiesto continuamente que, a pesar de su importancia, el Código Civil es sólo una parte del edificio jurídico completo. En su primer artículo nos remite ya a la Constitución Política del Estado, habla poco después de los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y de la Armada, y ello antes de tener existencia. No escasean las referencias al Derecho Internacional ni al Derecho Canónico ni al ansiado Código de Enjuiciamiento.

El culto a la ley escrita, el respeto a la norma dada impidieron a Bello dar acogida a las modernas y románticas ideas del llamado Derecho Libre. Para el legislador chileno el juez tiene casi siempre un texto que aplicar. No puede echar mano de pre-

ceptos generales que le dieran facilidad de movimiento; sus facultades discrecionales son escasas. Las categorías legales podrán parecerle rígidas y estrechas, pero tienen valor supremo. Frente a ellas no caben las interpretaciones audaces ni abren cauce para creaciones jurídicas novedosas. Bello quiso evitar esto, no porque desdeñara a la magistratura, sino porque estaba imbuido de la idea de que era preciso descartar todo lo personal y atrabiliario. En su mente, la ley y el Supremo Gobierno sustituyeron al rey.

Flota a lo largo de todo el articulado del Código una tendencia innegable a sistematizar, a presentar cuadros de clasificaciones y subclasificaciones. Ejemplos característicos de esta norma clásica nos los dan los artículos 1437 y 2284, que clasifican las fuentes de las obligaciones y dan en ellas cabida a los cuasicontratos, más que por su importancia, a nuestro juicio, por ser compañeros simétricos de los contratos. La distinción entre delitos y cuasidelitos civiles puede, tal vez, obedecer a este mismo deseo. El título “De la Prescripción”, colocado acertadamente al final del cuerpo de leyes, demuestra esa misma tendencia. Prefirió Bello mantener la unidad en instituciones tan diferentes como son usucapión y prescripción liberatoria para poder presentar de una manera ordenada sus puntos de contacto y sus elementos de comparación. Aborda tímidamente lo que ahora denominamos caducidad, mas no quiso ahondar en su estudio, juzgando con acierto que no estaba aún bien madurada. Es curioso: un notable sentido, que llamaríamos de perspicacia jurídica, le hizo evitar a Bello el desarrollo de nociones jurídicas difíciles y de escasa aplicación práctica. Se contenta, por eso, con una ligera referencia, es lo que ocurre, verbi gratia, con el comodato precario, con el enriquecimiento injusto.

Que amaba Bello a los escritores clásicos es algo que no requiere demostración. Su afición al Derecho Romano y al Viejo Derecho Español está de sobra acreditada en sus escritos. No podría decirse que los abandonó al componer el Código Civil, pues los sigue en todo aquello que con-

serva aplicación, y de preferencia cogió su espíritu; pero podría, sin empacho, asegurarse que de todos los elementos que dan carácter a una obra jurídica es éste, el del culto a la antigüedad, el que una menor importancia tiene en su trabajo. Por una maravillosa complexión de su cerebro, Bello supo utilizar lo antiguo y lo nuevo. El lema universitario de "*Nova et Vetera*" parece haber sido compuesto por él. Toma del Derecho Romano y de sus comentadores cuanto estima provechoso al país naciente; mantiene de la misma manera la parte viva de la vieja legislación castellana y de la más reciente legislación indiana; pero atrevidamente incursiona por el Derecho francés, por el Derecho inglés y aun por el variado Derecho alemán para atraer a su huerto jurídico las plantas que convenía trasplantar. Su formidable espíritu ecléctico pudo, así, componer con materiales diversos una obra dotada de fuerte unidad. Y adelantándonos a quienes nos digan que su modelo fue el Código francés, les contestaremos que ello es efectivo en materia de obligaciones y contratos, pero no ciertamente en materia sucesoria ni en la constitución de la familia. Aun tratándose del régimen de la propiedad, la creación del régimen de la inscripción tomada de viejas leyes alemanas envuelve un adelanto que todavía no ha logrado acogida plena en Francia. Seguir en sus notas el recorrido de su espíritu es algo admirable: tan pronto lo ha impresionado una ley de Las Partidas como un comentario de Blackstone; una nota exegética de un autor francés de su predilección, Delvincourt o Pothier, lo decide en una cuestión que agitaba a los jurisconsultos romanos; una ley sarda o prusiana puede con él tanto como una Ley del Digesto. Lo que era nuevo en su tiempo lo apasionaba también; quiso estar siempre al día en publicaciones jurídicas y de ahí su empeño por obtener el Proyecto de Código Civil de García Goyena y los últimos libros de Troplong.

Se ha podido, así, adornar a Bello con todas las prendas de los juristas clásicos y además con el ardor de los juristas románticos para encontrar y fijar nuevas formas

jurídicas. Sus conocimientos gramaticales y lingüísticos y —¿por qué no decirlo?— su fino instinto literario le sirvieron para dar realce a su obra. Mucho hubiera perdido en belleza el Código Civil si a la solidez y equilibrio de sus disposiciones no hubiera correspondido la propiedad y elegancia del lenguaje. Si Stendhal lo hubiera conocido, lo hubiera elogiado con más propiedad que al Código francés. Entre la lengua sabrosa pero difusa de Las Partidas y la seca concisión del Código alemán, la lengua de nuestro Código Civil queda en una dorada medianía, en un término medio correcto y elegante a la vez, ligeramente persuasivo.

.....

Dentro del sistema político instaurado en 1833 la ley era omnipotente. Cabría afirmar, es claro, que ella no podía vulnerar el texto constitucional, el cual, para ser reformado, exigía condiciones rigurosas. Indudablemente los legisladores aceptaron esta limitación, aun cuando no hablaron de lo que hoy se denomina inconstitucionalidad de las leyes. La definición del artículo primero del Código Civil tampoco hace referencia a ella, se detiene en la exigencia de la forma para excluir los antiguos decretos-leyes de la administración Prieto y que cien años después volverían a tener apogeo entre nosotros. El texto dice así: "La ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite". Se aproxima la definición a la contenida en el Código de la Luisiana: "La ley es una declaración solemne de la voluntad legislativa. La ley manda, permite y declara penas y premios".

Pero ya no hay soberano ni monarca que dicte la ley y que la cambie a su parecer. El artículo 4º del viejo Código sardo decía: "El poder legislativo reside únicamente en el Rey". Igual principio, aunque no formulado así ni siquiera por escrito, existía en la antigua monarquía española. Para el legislador chileno todo eso ha concluido, como era de razón. El sustituto, empero, del monarca no iba a ser el Presidente de

la República, por grandes que fueren los poderes que le otorgó la Constitución: el sustituto iba a ser ese ente abstracto denominado ley.

El Código Civil rinde culto fervoroso a la ley. Ella, y no las personas que intervienen en su elaboración, recibirá los honores y esos honores redundarán en provecho de los jueces que la aplican, de los funcionarios que la hacen cumplir y de los ciudadanos que la obedecen. A la inversa, el rigor y la pena caerán sobre las personas que la violan o la dejan incumplida. En esta especie de religión de la ley se fundamentó el sistema portaliano, el cual alcanzaría su perfeccionamiento bajo el gobierno férreo de Montt y de Varas.

Volviendo al texto transcrito, que abre la marcha del numeroso articulado del Código, podemos ver que inmediatamente a su continuación viene el precepto del artículo segundo que quita a la costumbre, por larga y beneficiosa que fuere, el valor obligatorio. Sólo valdrá la costumbre como norma de derecho cuando la ley se remita a ella. De una plumada quedaron, así, derogadas las viejísimas normas del Derecho Canónico y de algunas leyes españolas que en determinados casos atribuían fuerza de ley a la costumbre.

Pero no se detiene aquí la omnipotencia de la ley. No quiere que los jueces, aun en forma reducida, compartan su imperio, como ocurría y ocurre en el sistema jurídico anglosajón. Sólo toca al legislador, nos adoctrina en el artículo tercero, explicar e interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio, y las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciarán. Los tribunales, es cierto, podrán hacer notar los vacíos que encuentren en las leyes (art. 5º) y los representarán al Presidente de la República; pero no pueden dictar normas obligatorias en silencio de la ley.

El autor del Código Civil miró con desconfianza a los jueces, fue un enemigo resuelto del llamado hoy Derecho libre. A lo largo del articulado podrá verse que sólo

en contadas ocasiones deja al arbitrio del juez la resolución de un problema: lo que quiere es que el juez aplique la ley y que no se salga de ella por ningún pretexto ni a ningún título.

Tampoco el Poder Ejecutivo, por grandes que sean sus facultades, podrá salirse de la ley. Le costaría al Presidente de la República o a sus ministros una acusación constitucional. Con todo, puede el Jefe del Estado dictar, en uso de su potestad reglamentaria, los reglamentos accesorios de la ley y que señalen la manera de aplicarla. Generalmente el Código habla de ordenanzas que para tal o cual efecto puede expedir el Presidente de la República; véanse los arts. 598, 603 y 1923, entre otros. Las Municipalidades también gozan de este favor, pero tratándose tan sólo de ordenanzas o reglamentos que recaigan sobre materias comprendidas en la Ley sobre Municipalidades, rigiendo entonces la del año 1842.

Al Presidente de la República le corresponde, además, otra función relacionada con las leyes: la de promulgarlas y en la forma que establece el art. 6º.

Esta ley, debidamente dictada y promulgada, pasa a ser obligatoria para todos una vez vencido el plazo indicado para su conocimiento, en el art. 7º. Y de tal manera es obligatoria dentro del territorio de la República, que han de obedecerla chilenos y extranjeros (art. 14). Con respecto a los chilenos su obligatoriedad puede traspasar las fronteras tratándose de ciertas leyes (art. 15).

La vigencia de la ley es indefinida. Sólo una ley revocatoria puede derogarla, de tal manera que ni su falta de aplicación ni una costumbre envejecida le harán perder su valor. Tal es la duración y el poder de la ley. Cuando el legislador quiere significar la fuerza que de una convención libremente pactada quiere atribuirle nos dice, en el art. 1545, que “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes”. No encontró términos más vigorosos y decisivos que éstos al establecer en este precepto el principio de la autonomía de la voluntad.



Pero esta omnipotencia de la ley –que en los regímenes democráticos, en concepto de Ripert, causa alarma– tuvo para el legislador del Código Civil límites infranqueables, si bien no perceptibles a primera vista. Los gobernantes y los legisladores tenían, desde luego y en su unanimidad o su casi unanimidad, el freno religioso, a la época fortísimo. El Derecho Natural clásico mantenía entonces su vigor y la mayor parte de sus mandamientos figuraban en las garantías constitucionales consagradas. Atendidas las circunstancias y lo reducido que era el cuerpo electoral, sujeto casi del todo a la voluntad gobernante, no era fácil que se cambiara la Carta Fundamental ni que se alterara la mayoría parlamentaria. El Poder Legislativo no iba a abusar de sus facultades, como efectivamente no abusó. Si las revoluciones hubieren llegado a triunfar, entonces sí que la omnipotencia de la ley hubiera podido ser lamentada.

### PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. *¿Cuál es el papel que tiene la ley en el ordenamiento jurídico, según la visión de Bello?*
2. *¿Y cuál es el papel que corresponde a la costumbre?*
3. *¿Cuál es el papel que corresponde al juez frente a la ley escrita?*
4. *¿Quién debe interpretar la ley, según el Código Civil?*
5. *Revise con detención los arts. 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 14 y 15 del Código Civil, citados por el profesor Lira, para comprender por medio de su estudio lo que este profesor afirma.*
6. *Busque en su Código Civil otros artículos diferentes de los citados por el profesor Lira, con los que usted pudiera ilustrar el afán de hacer clasificaciones y subclasificaciones a que se refiere este profesor.*
7. *Busque en su Código Civil artículos que a usted le parezcan destacables por la belleza o propiedad del lenguaje.*
8. *¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley chilena, esto es, en qué tiempo, a qué personas y en qué territorio se aplica?*

### 2ª CARACTERÍSTICA: LA IGUALDAD ANTE LA LEY

23. PEDRO LIRA URQUIETA: *El Código Civil y su época*, op. cit., págs. 61 a 63.

Las ideas igualitarias que propagó la Revolución Francesa encontraron fácil cabida en el Código de Napoleón. Escritores de tendencias tan diferentes como Montesquieu y Volney coincidían en esto: “El amor de la democracia –había escrito el primero– es el amor a la igualdad”, y el segundo proclamaba el “santo dogma de la igualdad”. Los preceptos 7 y 8, primeramente, y muchos que les siguen, acogieron en las leyes civiles esos principios de igualdad. Los hombres todos nacen iguales y gozan de los mismos derechos, no alterando esa igualdad ni la sangre ni el oficio; todos, sin distinción alguna, quedan sometidos a las mismas leyes y podrán ejercitar los mismos derechos. La creación de la nobleza napoleónica introdujo una primera brecha a este furor igualitario, obligando a modificar el art. 896 del Código Civil sobre prohibición de sustituciones. Más grave fue el intento de la Restauración de favorecer los títulos restableciendo los mayorazgos. Pero la reacción liberal de 1830 logró limitar los mayorazgos y suprimir el carácter hereditario de los títulos de pares. Después de 1848 desaparecieron los mayorazgos y sólo conservaron un valor honorífico los títulos de nobleza. En la actualidad, como observa con malicia Ripert, un título hereditario en Francia es el aviso que se da al público para que no favorezca con sus votos al candidato político que lo ostenta.

La Constitución española, a la época en que fue compuesto nuestro Código Civil, tenía preceptos análogos a los de la Carta francesa de 1830. En verdad la nobleza conservaba sólo preeminencia de honor y uno que otro pequeño privilegio. Ya la Real Cédula de 14 de mayo de 1789 había detenido la fundación de nuevos mayorazgos y las ideas libertarias e igualitarias francesas habían hecho mucho camino. El Proyecto de García Goyena recogía



esas aspiraciones al decir: “Las leyes no reconocen en el orden civil distinciones de nacimientos ni diferencias de condiciones sociales”. En su comentario, el magistrado español se lamenta de que todavía rijan tales diferencias para cruzarse en las órdenes militares.

.....

A diferencia de lo que ocurría en Francia y España, la posición de la nobleza era mucho más sólida en Inglaterra y en las monarquías alemanas y nórdicas. Los redactores del Código Civil tuvieron que inspirarse en los ejemplos latinos, y yendo más allá, en el ejemplo de la república esencialmente democrática, los Estados Unidos de Norteamérica.

Por lo demás, el problema había sido ya resuelto en sentido democrático e igualitario en la Carta de 1833. El art. 12 de su texto nos decía que en Chile no hay clase privilegiada, que ella aseguraba a todos los habitantes de la República la igualdad ante la ley. Más adelante, su art. 132 prescribía que en Chile no hay esclavos y que cualquiera que pisare su territorio quedaba libre. En cuanto a las vinculaciones –pedestal necesario de la nobleza hereditaria–, su art. 162 nos declaraba que ellas eran permitidas, pero sin dañar la libre circulación de las propiedades afectadas, lo que se reglamentaría por medio de una ley especial. La ley de 14 de julio de 1852 estableció el sistema desvinculatorio, y con anterioridad al Código Civil. Las prohibiciones de los arts. 745 y 769, sobre fideicomiso y usufructos sucesivos, vinieron, pues, a ser corolarios de los preceptos antes citados.

En cuanto a los títulos de nobleza, sabido es que el Director Supremo don Bernardo O’Higgins, por decreto de 16 de septiembre de 1817, los declaró abolidos y no sin cierta irritación. El texto de esa disposición nos permite afirmarlo: “Queriendo desterrar para siempre –se lee– las miserables reliquias del sistema feudal que ha regido en Chile, y que por efecto de una rutina ciega se conserva, aun en parte contra los principios de este Gobierno, he venido en

hacer la declaración siguiente: “Todo título, dignidad o nobleza hereditaria queda enteramente abolido; a los antedichos condes, marqueses, nobles o caballeros de tal o cual orden, se prohíbe darles títulos ni ellos podrán admitirlo. Quitarán todo escudo de armas u otro distintivo cualquiera y se considerarán como unos simples ciudadanos. El Estado no reconoce más dignidades ni da más honores que los concedidos por los Gobiernos de América”.

Después de lo expuesto se convendrá en que la regla del art. 55 del Código Civil no envolvía una novedad. Se limitaba a decir que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que fuese su edad, sexo, estirpe o condición, y agregaba que se dividían en chilenos y extranjeros. El art. 57 iba a ser más novedoso, pues dispone que no se establecen diferencias entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla el Código. Esta norma importaba un avance notable, y con razón ha merecido elogios. Las legislaciones de ese tiempo tendían a un reconocimiento de igualdad análogo, pero no se atrevían a formularlo de una manera tan contundente y absoluta. Todavía se hablaba del derecho de “aubaine” y de la “reciprocidad”.

Esta igualdad ante la ley tendría efectos no sólo para la adquisición de bienes y de derechos, sino también para la sucesión hereditaria. El legislador francés, como el nuestro, quiso que todos partieran de una misma raya en la carrera por la vida: al llegar podían existir diferencias notables, pero ellas no eran debidas al nacimiento ni al favor, eran fruto del trabajo y de la inteligencia de cada cual. Con otras palabras, la igualdad se procuró en todo, mas sin llegar al derecho de propiedad, que se mantuvo y aun se rodeó de favores. Esto lo veremos más adelante. Por ahora puede decirse que la tendencia igualitaria se ha proseguido en nuestros días, tratándose de los hijos no legítimos, suprimiendo el distingo de la muerte civil y dando una mayor igualdad a las partes que intervienen en el contrato de trabajo.

24. GONZALO FIGUEROA YÁÑEZ, *Persona, pareja y familia*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1995, pág. 10.

*El art. 55 del C.C. no define a la persona natural: sólo señala quiénes son personas.*

No existe en esta disposición un género próximo y una diferencia específica, ni se indican características esenciales de la persona, y, en consecuencia, falta una definición propiamente tal. El artículo no contiene sino un señalamiento: “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”. Falta el contenido, las características fundamentales que permitan establecer si un ser determinado puede o no ser incluido en el concepto de persona.

El señalamiento contenido en el art. 55 tiene, sin embargo, una gran virtud, que ha sido puesta de relieve por muchos civilistas nacionales: instituye el principio de no discriminación entre las personas naturales: no interesa la edad, ni el sexo, ni la estirpe, ni la condición, cuando se trata de establecer la calidad de persona. Este art. 55 del C.C. anticipó por muchos años algunas ideas sobre igualdad recogidas tan sólo durante el siglo XX por algunas Constituciones Políticas.

Entre nosotros, consagran este principio de igualdad jurídica especialmente los arts. 1º y 19 N°s 2 y 3 de la Constitución Política de 1980. Es sobre todo relevante el art. 19 N° 2 inc. 2º, que dispone que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. La idea ya estaba contemplada, como se ha dicho, en el Código Civil.

### PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. Revise el art. 55 del Código Civil y determine si usted está conforme con la definición allí contenida.
2. Revise el art. 57 del Código Civil y exprese si usted cree que la igualdad entre chilenos y extranjeros, que esa disposición consagra, rige en la actual realidad social chilena. Si usted estima que existen excepciones a dicha igualdad, anótelas para exponerlas en clase.

3. ¿Considera usted que el principio de igualdad está absolutamente consagrado en nuestra legislación civil? ¿Por qué?

### 3ª CARACTERÍSTICA: LA CONSTITUCIÓN CRISTIANA DE LA FAMILIA Y SU PROTECCIÓN

#### 25. Explicación

El legislador de nuestro Código Civil estableció el matrimonio monógamo e indisoluble, y en este último punto abandonó a su antecesor francés, que había admitido el divorcio *ad-vinculum*. Nuestro Código incluso entregó a la autoridad eclesiástica todo lo que decía relación con la celebración y validez del matrimonio. Dicho matrimonio constituyó “la piedra angular del edificio social y había que defenderlo y protegerlo en sí y en todas sus consecuencias”.<sup>5</sup> Por esa razón, el matrimonio válidamente celebrado quedó como fuente única de filiación legítima, y los hijos naturales e ilegítimos propiamente tales fueron excluidos de la sucesión de sus padres, en caso de existir hijos legítimos. Sólo se reconoció a aquellos el derecho de alimentos, en mayor grado a los naturales, y en mínima parte a los ilegítimos, siguiendo en esto el rigor y la severidad propios de nuestras antiguas costumbres.

Además, nuestro Código Civil estableció amplias potestades marital y paterna, tanto en las relaciones personales entre los cónyuges y respecto de los hijos, como en el aspecto patrimonial. El marido y padre gozaba de una fuerte relevancia frente a la mujer e hijos, que eran incapaces, como lo exigían también las costumbres de entonces.

26. PEDRO LIRA URQUIETA: *El Código Civil y su época*, op. cit., págs. 63 a 67.

El legislador del Código Civil no vaciló en admitir el matrimonio monógamo e indisoluble como la base única de la familia y,

<sup>5</sup> LIRA URQUIETA, PEDRO, *El Código Civil y su época*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1956, pág. 25.

por ende, como el fundamento de la sociedad. Su definición del art. 102 es prueba elocuente: “El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.

En el Mensaje del Código Civil se anuncia, sin ambages, que en materia de matrimonio corresponde a la autoridad eclesiástica el derecho de decisión sobre su validez, reconociéndose como impedimentos para contraerlo los que han sido declarados tales por la Iglesia Católica. Es la doctrina que expuso el primitivo art. 103. De manera que el matrimonio válido a los ojos de la autoridad eclesiástica lo era también ante la ley civil, si bien ésta se reservó el derecho de no admitir la dispensa del impedimento entre afines en línea recta (art. 104). Por cierto que la disolución pronunciada por la autoridad eclesiástica tenía su efecto en la ley civil (art. 123). La misma autoridad eclesiástica era la encargada de velar por el cumplimiento de las solemnidades del matrimonio, las cuales eran las propias de la Iglesia. Pero esto se refería al matrimonio entre personas católicas (art. 117), porque cuidaba el Código, siguiendo los pasos de la Ley de Matrimonio de Disidentes de 1836, de decirnos, en el art. 118, que los contrayentes de otra religión podían casarse ante el competente sacerdote católico y dos testigos, pero sin cumplir con el rito ni con otras exigencias que las previas sobre impedimentos dirimentes y permiso de ascendientes. Al casarse sólo declaraban que su ánimo era contraer matrimonio o que se reconocían el uno al otro como marido y mujer.

La celebración del matrimonio en el extranjero y sus posibles efectos en Chile aparecen considerados en los arts. 119 y 121, todos ellos concordes con el espíritu religioso de la institución.

En resumen, el legislador de 1855 mantuvo el régimen cristiano del matrimonio que estaba reconocido en la vieja legislación española. Y al hacerlo, mejorando muchas

de sus disposiciones, se manifestó de acuerdo con la legislación vigente en la mayor parte de los países europeos y americanos y, sobre todo, concorde con las costumbres fuertemente enraizadas. El matrimonio, a los ojos de los chilenos de ese tiempo, era, y con justicia, la piedra angular del edificio social, y había que defenderlo y protegerlo en sí y en todas sus consecuencias. De ahí que aun para celebrarlo se exigiera la autorización paterna o materna o de otros ascendientes o, por último, de un curador cuando los contrayentes tenían menos de veinticinco años, sin que nuestra ley hiciera distinguos entre el novio y la novia en materia de edad, como lo hacían el modelo francés y el Proyecto de García Goyena.

El matrimonio válidamente celebrado quedó como fuente única de la filiación legítima, ya que se tratara de los hijos concebidos en él o de los legitimados por matrimonio posterior, los restantes hijos pasaban a ser ilegítimos, si bien se establecieron graduaciones en la ilegitimidad, graduaciones que iban desde la filiación natural hasta la de dañado ayuntamiento.

La familia era protegida de diversas maneras.

Desde luego, el sistema de sociedad conyugal con su igualdad de gananciales permitía una fuerte autoridad marital, de una parte, y, de otra, la formación de un patrimonio común. Sólo en los contados casos en que pudiera pedir separación de bienes o divorcio perpetuo le era dado a la mujer escapar a esa tuición marital. Mientras vivía, el marido era el jefe indiscutido, y a su lado ella contribuía a amasar la fortuna que serviría, primeramente, para educar y establecer a los hijos comunes, y después, para la protección del cónyuge sobreviviente. En la gran generalidad de los casos la mujer quedaba favorecida, pues es sabido que ella sobrevivía a su marido y quedaba con bienes apreciables. La viuda, independientemente de su porción conyugal, recibía siempre la mitad de gananciales y con ello podía ser el apoyo de los hijos venidos a menos. El moderno sistema de separación total de bienes, tan generalizado en los países sajones, obedece, sin duda, a

cambios notables en la estructura social y económica, pero a la postre no beneficia a la mujer, como se ha creído.

.....

Tratándose de hijos naturales y de hijos ilegítimos, el legislador chileno de la época fue severo, como lo era la legislación de ese tiempo y como lo proclamaban las costumbres. Puede decirse que sus preceptos se limitaron a concederles el derecho de alimentos en mayor grado a los naturales, y en mínima parte a los restantes ilegítimos. El padre o madre natural tenía anexa a la obligación alimenticia la de proporcionar educación primaria y el aprendizaje de una profesión u oficio al hijo (art. 279). En derecho sucesorial la suerte de los naturales y de los ilegítimos quedaba ligada a la obligación alimenticia y en el resto, a la buena voluntad del testador. Si la sucesión era intestada, tenían entrada a ella los hijos naturales en defecto de los hijos legítimos.

Estos preceptos, tan restrictivos, han sido ahora reformados. Mas debe reconocerse que a la fecha de su implantación correspondían a las ideas en boga. Leyendo a Martínez Marina –autor que Bello conoció– venimos a saber que esa especie de horror con que la legislación española de Las Partidas y la que le siguió miró a los hijos ilegítimos de toda suerte, arranca del siglo XIII; no existió antes en España, y por el contrario, se citan textos de leyes visigóticas y de fueros locales que dieron a tales hijos un tratamiento muy semejante al que reciben en las leyes de nuestros días. ¡Tales son las mudanzas del Derecho!

Se colige de todo lo relacionado que el concepto tradicional y cristiano de la familia fue rigurosamente respetado en nuestro Código Civil; que el principio de autoridad fue asimismo mantenido y vigorizado, y que los preceptos que los consagraron estuvieron en consonancia con las ideas y con las costumbres que imperaban a la sazón.

## PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. *¿Piensa usted que la definición del matrimonio contenida en el art. 102 del Código Civil correspondió a las necesidades de la época en que*

*se dictó ese Código? ¿Piensa usted que corresponde a las necesidades de la época actual?*

2. *¿Por qué cree usted que sostiene el profesor Lira que el régimen de sociedad conyugal favorece a la mujer más que el régimen de separación de bienes? ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?*

3. *¿Cree usted conveniente que el marido y la mujer estén colocados en un plano de absoluta igualdad, tanto en sus relaciones personales como en el aspecto patrimonial?*

4. *Conociendo la nueva Ley de Matrimonio Civil, ¿considera usted que la constitución cristiana de la familia y su protección sigue siendo una de las características de nuestro Código Civil?*

## 4ª CARACTERÍSTICA: AMPLIA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDIVIDUAL O ABSOLUTISMO DOMINICAL

### 27. Explicación

Uno de los fundamentos básicos de la Revolución Francesa, recogido luego por los Códigos Civiles que fueron su consecuencia, fue la liberalización de la propiedad privada, concebida como propiedad individualista y absoluta, y sin las trabas que le imponía la legislación medieval, por medio de mayorazgos, vinculaciones y capellanías, usufructos y fideicomisos sucesivos, todos los cuales fueron abolidos por la legislación revolucionaria.

Para lograr los nuevos ideales, nuestro Código Civil estableció, en el artículo 582, que la facultad de disposición es de la esencia del dominio; dispuso un sistema especial de protección de la posesión de los bienes raíces inscritos y reconoció el derecho del propietario a disponer de su patrimonio por causa de muerte, pero con preferencia para los hijos legítimos.

28. PEDRO LIRA URQUIETA: *El Código Civil y su época*, op. cit., págs. 67 a 71.

A la propiedad territorial de origen feudal, llena de trabas y de limitaciones, había



sucedido, con el advenimiento de la legislación revolucionaria, la propiedad particular y libre. Los nuevos propietarios, hijos legítimos de la Revolución, no admitían ni resabios de los antiguos privilegios. El artículo 544 del Código de Napoleón no hacía otra cosa que consagrar una situación estable al decir: “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal que no se haga de ellas un uso contrario a las leyes y reglamentos”.

Había concluido la propiedad vinculada, basamento de la antigua nobleza, y el propietario pasaba a ser un dueño tan absoluto como lo habían sido los propietarios romanos del período clásico.

.....

“Al ciudadano pertenece la propiedad, al soberano el imperio”. Pero ese imperio no puede atentar a la propiedad, sino prescribir, respecto de ella, lo que reclama el bien general. En el antiguo Derecho, manifestaba Portalis en esa ocasión, el soberano lo invadía todo y llegaba a amagar el derecho de propiedad; muy pocos bienes quedan enteramente libres. Pero ahora, suprimido el régimen feudal, la libertad era de la esencia de los bienes y en especial de la propiedad. Ella merecía ser apodada sagrada. Ni los particulares, ni las instituciones, ni el soberano mismo, nada podrían contra ella. Sólo a virtud de una justa indemnización pagada previamente, y expedida por ley, podía alguien perder el dominio de algún bien.

Esta doctrina, tan razonable como elocuentemente expuesta por Portalis, venía a ser, en definitiva, la doctrina clásica del Derecho de Propiedad. Podríamos decir que exageraba en algo el aspecto individual del derecho, pues silenciaba en lo posible las cortapisas que nacen del bien común y que señalaba la concepción tomista. Mas los tiempos así lo exigían. La doctrina del Código de Napoleón sobre la propiedad individual es la consagrada por los pensadores y economistas de la Ilustración. Su misma concepción del llamado Derecho Natural estaba desprovista del ingrediente religioso

que antes había tenido. Pudo hablar, así, el expositor Portalis “de los santos y establecer principios del Derecho Natural y Público”, siendo el principal de ellos la defensa de la propiedad. Como derivaciones lógicas de ese principio tendríamos la prohibición de vinculaciones y mayorazgos, la repartición equitativa de los bienes del causante y las limitaciones voluntarias del dominio, de suyo restringidas a la duración de la vida y sin poder perpetuarse.

El Código francés marcó, de esta manera, la consagración de las nuevas ideas en esta materia. Pudo ser llamado, sin reticencias, el código de los propietarios. Estaba a tono con las reglas de la economía liberal, que triunfaba plenamente en su país de origen, Escocia e Inglaterra, y se propagaba por el resto del mundo. Los economistas de Manchester veneraron como a dioses a la libertad, en todas sus formas, y a la propiedad individual exenta de ataduras y de embarazos. El auge industrial que comenzaba imponía esta creencia a los gobernantes, a los legisladores y a los hombres de negocios. Había que favorecer al máximo la iniciativa individual y fomentar la formación de sociedades de personas o de capitales, nacionales o internacionales. Se miraba como opresión odiosa y perjudicial cualquier limitación que entrabara este espíritu de empresa y de ganancia. Los que no eran aptos para este juego debían desinteresarse de él o caerían vencidos. Ya se podía anticipar la exacerbación del egoísmo y de la dureza que traería consigo esta filosofía económica, que los norteamericanos bautizarían con el nombre harto expresivo de “áspero individualismo”. Entonces daba sus primeros y afortunados pasos para lograr su apogeo en la cúspide de la era victoriana.

En España estas ideas habían encontrado, asimismo, ancho cauce. No es preciso llegar al Proyecto de García Goyena para topar con ellas. Todo el magnífico y célebre informe sobre la Ley Agraria, de Jovellanos, es un alegato en pro de la libertad de la propiedad particular. Su crítica a la abusiva institución de la Mesta y a las prohibiciones del cerramiento; las impugnaciones a los

mayorazgos y a las manos muertas; su ataque a las aduanas internas y a las medidas que impedían el libre juego del comercio, son todas anticipaciones felices de las ideas expuestas por el conde Portalis. En verdad, Jovellanos y Portalis eran hombres representativos del Antiguo Régimen, conservadores y, a la vez, progresistas, y que deseaban la reforma de las instituciones, pero dentro del orden. En la bella semblanza que le ha consagrado Sainte-Beuve, el codificador francés aparece como el eslabón que unió la sabiduría jurídica de la era borbónica con los adelantos revolucionarios.

Conocido esto, comprendemos que Bello no pudo dudar en sentar la propiedad sobre bases sólidas. Su definición del artículo 582 es expresiva: “*El dominio* (que se llama también *propiedad*) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra ley o contra derecho ajeno”.

La propiedad, aun siendo libre, puede hallarse sujeta a limitaciones que le imponga el mismo dueño, pero tales limitaciones serán por lo común temporales, de duración escasa. La ley prohíbe los fideicomisos y los usufructos sucesivos (artículos 745 y 769). Siguiendo los preceptos constitucionales ha de admitir las vinculaciones existentes, pero atiende a su liberación mediante el ingenioso sistema de convertir los gravámenes perpetuos que impedían la enajenación en censos; el propietario conserva también libertad para separar el goce del dominio o para instituir, de una sola vez, un fideicomiso.

Las limitaciones impuestas a la propiedad por la ley son escasas dentro del Código Civil. Como las principales figuran las servidumbres legales del artículo 839, y de ellas la mayor parte se constituirán en provecho de particulares.

La Constitución Política garantiza el derecho de propiedad en forma absoluta y su posible pérdida sólo podría sobrevenir por efecto de una ley expropiatoria, mas dando en todo caso al propietario que sufría la expropiación una previa y equitativa indemnización. No fue, así, necesario insistir en este punto en el texto mismo

del Código, como lo habían hecho otros cuerpos de leyes.

Consecuencia necesaria del reconocimiento pleno de la propiedad y de su utilidad es el derecho a disponer de ella por causa de muerte. Todo el Libro III del Código Civil se ocupa con gran prolijidad de esta materia, que viene a caer en el vasto campo de la propiedad. Pero si el legislador chileno mira con ojos benignos y protectores a la propiedad individual, no dispensa iguales favores a la propiedad común. Diríamos que la ve con malos ojos y que tiene prisa en hacerla cesar. A ese fin obedece el artículo 1317: “Ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión; la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario”. Y agrega: “No puede estipularse proindivisión por más de cinco años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto”.

El Derecho de propiedad, en todo caso, pasó a tener una garantía más eficaz que las antiguamente conocidas mediante el sistema de la inscripción en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces. El Código Civil acogió ampliamente, y mejorándolo, el sistema ideado en algunos Estados de Alemania y que ya, a mediados del siglo XIX, gozaba de los favores de los entendidos. Los escritores franceses admitían su bondad y en el Proyecto de García Goyena encontramos un plan completo que en mucha parte aprovecharon nuestros legisladores.

## PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. Revise el art. 582 del C.C. y determine si la noción de propiedad contenida en él está de acuerdo con las tendencias contemporáneas sobre este derecho. En caso negativo, indique los puntos de la discordancia.

2. Explique cómo se “liberalizó” la propiedad al dictarse los Códigos Civiles de corte clásico, y qué ventajas trajeron a este respecto esos Códigos para las ideas prevalecientes en la época.

3. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que el C.C. mira con malos ojos la copropiedad?

### 5ª CARACTERÍSTICA: LA LIBERTAD DE CONTRATAR

29. PEDRO LIRA URQUIETA: *El Código Civil y su época*, op. cit., págs. 71 y 72.

El precepto del artículo 1545 del Código Civil establece el principio de la autonomía de la voluntad: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

El Código eleva a la categoría de ley el convenio libre y lícitamente concertado. En el Título II del Libro IV, cuyo epígrafe reza: “De los actos y declaraciones de voluntad”, se limita a exponer los requisitos que han de reunir los convenios que van a ser obligatorios. Exige, como es de razón, la capacidad legal de los contrayentes, el consentimiento no viciado, la existencia de un objeto lícito y de una causa lícita. Cumpliéndose con esas condiciones, los particulares son libres y soberanos para concertar los contratos que deseen. No se pone trabas a su número ni a su extensión. Los más conocidos de los contratos están estudiados y reglamentados en diversos títulos del Código, pero frente a ellos existen todos los innominados y las combinaciones y variantes de los nominados. El legislador tiene fe en la iniciativa de los particulares y piensa razonablemente que ellos podrán idear nuevas convenciones que merecen su respeto. Tampoco procura introducirse en los contratos conocidos. Con tal que se cumplan las prescripciones mínimas que se establecen en el texto, los contratantes son libres para obligarse en la forma que deseen. Excepcionalmente el legislador pone un tope a las ganancias, como ocurre en la lesión enorme en materia de compraventa de inmuebles, y en la reducción de intereses excesivos en las obligaciones de dinero. Pero aun en esos casos deja entregado a la parte afectada el reclamo de su pérdida. Piensa que cada cual sabrá velar por sus intereses

y no pone, por lo común, límite alguno a las ganancias que puedan derivarse de un contrato. Los particulares son soberanos, por ejemplo, para pactar comodatos y rentas vitalicias que envuelvan grandes utilidades o grandes pérdidas. En el mutuo mismo, la libertad es grande. El principio de la igualdad numérica de la moneda está consignado en el artículo 2199<sup>6</sup> y los intereses pueden convenirse en dinero o en cosas fungibles (artículo 2205). Los intereses fueron admitidos, alejándose definitivamente el legislador de los escrúpulos morales de la antigua usura, pero reglamentados en el artículo 2206, de modo que no podrían pasar de cierto máximo. El anatocismo, en cambio, entró a la zona de las prohibiciones.

.....

El respeto de nuestro Código Civil por la libertad para contratar estaba a tono con el pensamiento jurídico, económico y social de ese tiempo.

El gran esfuerzo de la violenta legislación revolucionaria había sido dirigido en ese sentido y terminó por hallar cabida en el famoso Código de Napoleón. Los códigos que se dictaron a imitación suya también consagraron esa libertad.

La naciente era industrial de que aprovecharon en grado máximo los ingleses imponía ese principio. El comercio internacional también lo exigía. Podemos, pues, asegurar que en este punto, como en muchos otros, la nueva legislación civil chilena aparecía como avanzada y progresista.

30. ARTURO ALESSANDRI RODRÍGUEZ: “El contrato dirigido”, Conferencia dictada en 1940. Recopilada en *Las actuales orientaciones del Derecho*, Editorial Nascimento, 1942, págs. 11 y siguientes.

Uno de los principios fundamentales del derecho contractual moderno es el de la autonomía de la voluntad, que consiste en la libertad de que gozan los particulares para celebrar los contratos que les plazcan y determinar su contenido, efectos y duración.

<sup>6</sup> Actualmente derogado.

En virtud de esta autonomía, los particulares pueden pactar los contratos que más convengan a sus intereses, sean o no de los reglados por la ley; combinar unos y otros entre sí; atribuir a los contratos que celebren efectos diversos de los que la ley señala y aun modificar su estructura. Pueden, por ejemplo, estipular un pacto comisorio en un contrato unilateral, convertir en bilateral un contrato naturalmente unilateral, subordinar el perfeccionamiento de un contrato consensual por naturaleza al otorgamiento de un instrumento público o privado. Pueden, igualmente, determinar con entera libertad el contenido del contrato, en especial su objeto, y la extensión y efecto de los derechos y obligaciones que engendre; fijar su duración; señalar las modalidades que han de afectarle; alterar, modificar y aun suprimir las cosas que son de la naturaleza del contrato; determinar, entre las diversas legislaciones de los Estados, aquella por la cual ha de regirse el contrato, etc.

De ahí que las leyes relativas a los contratos sean, por lo general, supletorias de la voluntad de las partes; sólo se aplican en el silencio de éstas. Y que la misión del juez, en presencia de un contrato, se reduzca a interpretar o restablecer esa voluntad. El juez no puede desentenderse de ella, mucho menos puede sustituirla por la propia.

Esta autonomía no es, sin embargo, absoluta. Como todos los derechos y libertades, tiene sus limitaciones. Desde luego, los contratantes no pueden alterar, modificar ni variar las cosas que son de la esencia del contrato que pacten. Si lo hicieren, el contrato, o no produciría efectos civiles, o degeneraría en otro diferente, como dice el artículo 1444 del Código Civil.

No podrían, por ejemplo, pactar una compraventa o un arrendamiento sin precio. No pueden tampoco estipular nada que vaya contra las prohibiciones legales, el orden público o las buenas costumbres. Tales estipulaciones serían nulas absolutamente por ilicitud de objeto o de causa, de acuerdo con los artículos 10, 1461, 1466, 1467 y 1682 del Código Civil.

La autonomía de la voluntad, tal como la consagran el Código Civil chileno y los

Códigos extranjeros vigentes, es la aplicación en materia contractual de los principios liberales e individualistas proclamados por la Revolución Francesa y que alcanzaron su mayor auge durante el siglo XIX. Si los derechos, se dice, son meras facultades que la ley reconoce a los individuos para que puedan desarrollar su personalidad y satisfacer sus necesidades, si la libertad es la base de la actividad humana, claro está que aquéllos pueden obrar como mejor les plazca, no siendo, naturalmente, contra el orden público o las buenas costumbres.

Consecuencia de ello es que la voluntad debe ser limitada sólo en casos extremos y que la intervención del legislador en materia contractual debe reducirse a lo estrictamente indispensable, porque siendo el contrato el resultado del libre acuerdo de las voluntades de personas que están colocadas en un perfecto pie de igualdad jurídica, no puede ser fuente de injusticias, ni engendrar abusos.

### PREGUNTAS Y EJERCICIOS

1. *¿Cuál es la base en la que descansa la autonomía de la voluntad, consagrada por el art. 1545 del C.C.? ¿Cree usted que esta base corresponde a la realidad en la sociedad contemporánea?*

2. *¿Modificaría usted, en algún sentido, el principio clásico de la autonomía de la voluntad, para poner el Código a tono con los requerimientos de la sociedad contemporánea? En caso afirmativo, ¿en qué forma lo modificaría?*

3. *¿Qué entiende usted por “cosas de la esencia de un contrato”? Dé ejemplos en los contratos más conocidos.*

### 6ª CARACTERÍSTICA: EL INDIVIDUALISMO JURÍDICO

#### 31. Explicación

El Código centra su preocupación en el individuo, en la persona humana, con despreocupación a veces por los conglomerados sociales, los grupos de personas o los intereses colectivos. Es el individuo, aisladamente considerado, el que atrae la mayor preocupación del Código, el que



éste protege en su vida intrauterina, en los artículos 75 y 77; el que éste define en el artículo 55 descartando la existencia de clases privilegiadas; el que iguala con los otros individuos extranjeros en el artículo 57, el que manifiesta su voluntad para obligarse en los artículos 1445 y 1545; el que es protegido si es incapaz en el artículo 1447; el centro del principio básico de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratar; aquel de quien se predica la libertad de testar en el artículo 999 o la responsabilidad civil extracontractual en el artículo 2314. Es la intención de los individuos el principal elemento de interpretación de los contratos y la autonomía de la voluntad no está limitada sino por la ley, el orden público y las buenas costumbres.

Para Bello, el hombre es un ser pensante con voluntad autónoma, que protege y ampara el ordenamiento, y que asume responsabilidad civil si provoca perjuicios en el patrimonio ajeno. Es asimismo la voluntad humana la que determina el valor comercial de todos los bienes, al manifestarse libremente la oferta y la demanda; es incluso la voluntad humana la que fija el precio del dinero, al determinarse los intereses del mutuo por las reglas del mercado.

En cambio, las manifestaciones jurídicas que representan al hombre en comunidad y a las agrupaciones sociales, son miradas con desconfianza por nuestro Código: las personas jurídicas necesitan de la autorización gubernamental o legal para constituirse, como prescribe el artículo 546; las comunidades pueden siempre terminar si

cualquiera de los comuneros ejercita su derecho a pedir la partición, y los pactos de indivisión tienen siempre duración limitada. De más está decir que algunas manifestaciones modernas de la juridicidad colectiva, como los patrimonios pluripersonales o las propiedades comunitarias, fueron desconocidas para nuestro Código, así como para todos los Códigos clásicos.

### 7ª CARACTERÍSTICA: LA CONSAGRACIÓN DE PRINCIPIOS MORALES

#### 32. Explicación

El profesor Leslie Tomasello, en su libro *El Código Civil chileno en el prisma del tiempo* agrega, como principio fundamental de nuestro Código, la consagración de algunos principios morales como la tutela de la buena fe y la sanción al dolo, la mala fe y al fraude de los artículos 1458, 1558, 2284 y 2468; como el principio *nemo auditur*, establecido en el artículo 1683, o como la invalidez de toda estipulación o condición contraria a la moral o las buenas costumbres, establecida en los artículos 1475 y 1070. Señala también la regla del artículo 1470 que declara válido el pago de una obligación natural.

Agreguemos la disposición del artículo 1467, que invalida las convenciones que tengan una causa prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o el orden público.